



Hacienda inicia el diseño del Presupuesto de 2027 con foco en vivienda, IA, energía e I+D+i

ESPAÑA PROMETE “EL MAYOR GASTO SOCIAL DE LA HISTORIA” / El Gobierno publica en el BOE la orden ministerial de elaboración de las Cuentas públicas de 2027 fijando como prioridades la política inmobiliaria, la descarbonización o la ciberseguridad.

Juande Portillo. Madrid
Hacienda dio este viernes el pistoletazo de salida al diseño del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 con la publicación de la orden ministerial de elaboración de las nuevas cuentas públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El departamento que dirige Arcadi España ha dado al resto de ministerios hasta el próximo 29 de junio para remitir sus prioridades de gasto para el nuevo año a la Dirección General de Presupuestos de Hacienda.

A la espera, el ministro anticipó que los nuevos Presupuestos “contemplarán el mayor gasto social de nuestra historia, fijarán como principal prioridad el acceso a la vivienda, garantizarán el poder adquisitivo de nuestras pensiones y continuarán con la transición energética”. El texto de la orden acentúa también que incluirá medidas para desarrollar la inteligencia artificial, cumplir los compromisos internacionales de gasto en Defensa o incrementar la inversión en I+D+i.

La “prioridad absoluta” del proyecto, en todo caso, será hacer “el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda de toda nuestra historia democrática”, ha dicho el ministro. La orden ministerial detalla que el Presupuesto busca “garantizar el acceso a la vivienda mediante el incremento de la oferta de inmuebles a precios asequibles, previniendo situaciones de tensión en el mercado del alquiler”. Con este objetivo, se desplegarán medidas para “apoyar especialmente a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a una vivienda digna”, “dotar a comunidades autónomas y municipios de herramientas eficaces que permitan contener o reducir los precios del alquiler”, y ampliar “el parque público destinado al alquiler social”.

Un gran segundo polo de inversión será el dirigido a desarrollar la transición medioambiental “que está haciendo de España uno de los países más resilientes frente a los *shocks* externos” como el provocado por la guerra de Irán, reivindicó el titular de Hacienda. En este sentido, se



El ministro de Hacienda, Arcadi España.

Los ministerios tienen tres semanas para enviar sus prioridades de gasto

J. Portillo. Madrid
Al enterrar la promesa de un Presupuesto para 2026 y dar la orden de arranque de la elaboración de las cuentas públicas de 2027 esta misma semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está a tiempo de cumplir –por primera vez en esta legislatura– los plazos constitucionales que le obligan a presentar el proyecto presupuestario diseñado para el próximo año antes de que culmine septiembre. Está por ver, sin embargo, que lo haga, en vista de que el mi-

nistro de Hacienda, Arcadi España, ya anticipó el jueves que esperará a pactar las cuentas con los socios antes de llevarlas al Parlamento. El riesgo está en que el plazo para ese diálogo podría alargarse a conveniencia, permitiendo a Sánchez elegir en qué momento constatar la falta de apoyos –previos al proyecto o como enmienda a la totalidad de las cuentas– y convocar elecciones.

De momento, socios clave del Gobierno como PNV o Junts han dado ya por zanjada la legislatura ante el go-

teo de casos de corrupción que afectan al PSOE y dudan de que haya opciones de aprobar unas cuentas, aunque no faltan los grupos que comienzan a hacer peticiones a cambio de sus votos.

El Gobierno, sin embargo, está a tiempo de cumplir sus obligaciones, tras pasar tres años sin presentar siquiera un proyecto presupuestario, sobreviviendo a costa de prorrogar tres veces las cuentas de 2023. Hacienda ha dado tres semanas al resto de ministerios para reco-

pilgar sus prioridades de gasto, mientras que Economía busca actualizar el cuadro macro este mismo mes. El Gobierno deberá aprobar también el techo de gasto y proponer una senda fiscal, con los objetivos de déficit y deuda, que requiere informar a las regiones en un Consejo de Política Fiscal y lograr el aval del Parlamento. De no obtenerlo, podrá presentar una segunda propuesta en el plazo de un mes, para sustentar el Libro Amarillo que debe presentar al Congreso antes de octubre. Pero el tiempo corre.

de investigación y empresas.

Otro eje de actuaciones es el destinado a avanzar en la digitalización de la sociedad, promoviendo “el desarrollo y la expansión de la IA [inteligencia artificial] en nuestro país para capitalizar sus beneficios y garantizando que su despliegue sea transparente, ético, responsable y humanista”. Para ello, se avanzará en la conectividad de las zonas rurales, se fomentará la innovación

en las y se invertirá en mayor ciberseguridad.

Finalmente, se prevé reforzar la inversión en infraestructuras, modernizar las administraciones y cumplir “los compromisos adquiridos junto a nuestros socios estratégicos en materia de seguridad, Defensa e innovación”.

Del lado social, el Presupuesto anticipa “medidas destinadas a preservar el poder adquisitivo de las pensiones,

El plan busca lograr mayor autonomía estratégica y cumplir los objetivos pactados en Defensa

Promete revalorizar pensiones, reforzar sanidad y educación, sin dejar de rebajar déficit y deuda

reforzar la sostenibilidad del sistema mediante una financiación equilibrada y promover su equidad intergeneracional”; preservar el carácter universal del Sistema Nacional de Salud, impulsando la atención primaria en Sanidad y reduciendo la listas de espera, o reforzar el modelo frente a los “retos demográficos, epidemiológicos y tecnológicos del futuro”. También se apuesta por reforzar la educación pública; impulsar políticas de apoyo a la juventud; promover la igualdad real entre mujeres y hombres; o respaldar el proyecto europeo.

El Presupuesto fija la orden, deberá promover un crecimiento “sostenible, equilibrado e integrador, impulsando la modernización y el fortalecimiento de la competitividad económica”, favoreciendo “la generación de empleo de calidad en sectores con alto valor añadido”. También aboga por reforzar el Estado del bienestar y “la protección de los servicios públicos esenciales, independientemente de la administración encargada de gestionarlos”, en un toque de atención a las comunidades autónomas (responsables de sanidad, educación o vivienda).

Todo ello, se asevera, sin descuidar los principios de responsabilidad fiscal que se trasladarán con una reducción progresiva del déficit público, o la rebaja de la deuda pública, que se confían en reducir del 100% del PIB al final de esta legislatura. En paralelo, el Gobierno recuerda su intención de reformar el sistema de financiación autonómica en aras de una mayor “justicia territorial”.